

EL RECUADRO

El pasado día 11 de enero el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del estado para 2019 que remitió a las cortes Generales para iniciar en el Congreso de los Diputados un trámite parlamentario que se aventura largo y complejo en función de las transacciones y modificaciones que los grupos políticos que sustentan al Gobierno se proponen plantear.

Lo más relevante de estos Presupuestos es, sin duda alguna, el incremento del gasto en pensiones, dependencia, desempleo, becas para el estudio, pobreza infantil, o lucha contra la violencia machista, que suponen que el 57 por ciento de los Presupuestos se dedicará a gasto social.

La principal partida presupuestaria es la destinada a pensiones, 157.864 millones de euros, con un incremento del 6,2 por ciento respecto a 2018, tanto por su revalorización, como por la subida de las mínimas y de las no contributivas. Por su parte, el gasto destinado a la atención a la dependencia se incrementa un 59,3 por ciento hasta alcanzar los 2.231 millones de euros a los que se suman otros 315 para financiar las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de personas dependientes.

El sistema general de becas y ayudas al estudio recibirá 1.620 millones de euros, un 10 por ciento más que en 2018, y el Plan de Choque por el Empleo Juvenil otros 600 millones. Los jóvenes también serán, básicamente, los destinatarios de las políticas de vivienda que incrementan su dotación en un 41 por ciento, con 137 millones destinados al "Plan 20.000 Viviendas", y del gasto para financiar libros de texto y material didáctico que se presupuesta en 100 millones de euros.

Los parados, cuyo número los Presupuestos prevén que se reduzca, si bien a menor ritmo que en ejercicios anteriores, hasta situar la tasa de paro en el 14 por ciento, verán reforzada su protección con un incremento del 4 por ciento del dinero destinado a políticas de desempleo. Los Presupuestos también recogen el incremento 22,3 del salario mínimo hasta los 900 euros.

Las Comunidades Autónomas recibirán 110.570 millones de euros, un 6,2 por ciento más que en 2018, para financiar servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, y las corporaciones locales 19.329 millones, un 7,6 por ciento más.

El Gobierno quiere también impulsar un cambio en el modelo productivo y mejorar la competitividad de la economía con un incremento del 5,6 por ciento en la partida de I+D civil y del 39,9 por ciento en políticas de infraestructuras.

Para afrontar este incremento generalizado del gasto, el Gobierno se propone buscar un modelo fiscal más justo y redistributivo que hará imprescindible una subida de los impuestos que se hará caer sobre las rentas más elevadas y las grandes empresas.

Con ello, el Gobierno prevé que los ingresos tributarios alcancen los 227.356 millones de euros, la mayor cifra de la historia y un 9,5 por ciento más que en 2018. El Impuesto de Sociedades incrementará su recaudación un 14,1 por ciento hasta los 25.579 millones de euros, con un nuevo tipo mínimo del 15 por ciento sobre la base imponible para las grandes empresas y del 18 para las que cuentan con un tipo agravado del 30 por ciento. Por su parte, el IRPF incrementará su recaudación un 4,9 por ciento, y se implantan nuevas figuras tributarias como el Impuesto sobre las Transacciones Financieras o el de Servicios Digitales.

La realidad macroeconómica, sin embargo, recomendaría una asignación de los recursos más enfocada a la generación de actividad económica, a la reducción del paro y del déficit y a la eliminación de desequilibrios. Y, por el contrario, existe un amplio consenso sobre que, la de los Presupuestos, no es la asignación más eficiente de los recursos posible y que generará menos inversión, caídas de la producción y menor creación de empleo, dificultando así su propia financiación.

Estos Presupuestos, según el Gobierno, fortalecen el Estado del Bienestar, pero hay en ellos muy pocas evidencias de que realmente vayan a servir para impulsar la actividad económica. Muchas menos de las que apuntan a que, fundamentalmente, buscan apuntalar la precariedad parlamentaria en la que se sustenta el Gobierno.